

01 DIC 2020

OFICINAS DE PARTES COMUNES
MORELIA, MICHOACÁN

AMPARO DIRECTO: 129/2020

RECURSO DE REVISIÓN

QUEJOSOS: [REDACTED]

[REDACTED] Y [REDACTED]

TÓCA PENAL: 3/2020-V-NSJP

EXP. DE CONTROL INTERNO: 96/2029 y 97/2019

C. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO

- Agravio original
- 1 copia de agravio

RECEBIDO
DECIMO PRIMER
CIRCUITO
MORELIA, MICHOACÁN

2020 DIC -2 PM 12:00

3324

COLEGIADO EN MATERIA PE

OFICINA DE PARTES

[REDACTED] en nuestro carácter de quejosos plenamente reconocido dentro de los autos del amparo directo al rubro citado, ante usted con el debido respeto comparecemos a exponer:

Con fundamento en el artículo 33, fracción I, 40, 80, 81, fracción II, 83, 86, 88, 96 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo en vigor, en tiempo y forma interponemos recurso de **REVISIÓN**, en contra de la sentencia emitida en sesión pública ordinaria virtual número 17 de **veintinueve de octubre de dos mil veinte**, por éste órgano colegiado, en cuyo único punto resolutive determinó: **ÚNICO**. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED] respecto del acto y autoridad precisados en el resultado primero de esta ejecutoria por los motivos establecidos en el último considerando de la misma; acto reclamado que se hizo consistir en la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veinte, dictada por la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, al resolver el toca de apelación 3/2020-V-NSJP, de su índice.

Por lo expuesto y fundado.

A USTED C. MAGISTRADO ATENTAMENTE PEDIMOS:

ÚNICO.- Admitido el presente recurso y darle el curso legal correspondiente.

Morelia, Michoacán, diciembre 1 uno de 2020 dos mil veinte.-

[REDACTED]

Handwritten signature



AMPARO DIRECTO: 129/2020
RECURSO DE REVISIÓN
QUEJOSOS: [REDACTED] Y [REDACTED]

TOCA PENAL: 3/2020-V-NSJP
EXP. DE CONTROL INTERNO: 96/2029 y 97/2019

**MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CIUDAD DE MÉXICO**

[REDACTED] y [REDACTED] en nuestro carácter de quejosos dentro de los autos del **amparo directo penal 129/2020, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito**, quienes mediante sesión pública ordinaria virtual número 17 de **veintinueve de octubre de dos mil veinte**, determinaron negarnos el amparo y la protección de la justicia federal; consecuentemente, confirmaron la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veinte, dictada por la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, al resolver el toca de apelación 3/2020-V así como la sentencia definitiva emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio instituido como Tribunal de Enjuiciamiento dictada dentro de AUDIENCIA DE DEBATE, celebrado en audiencias de fecha dieciocho, diecinueve, veinte y veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve en la causa penal 717/2018; autorizamos en términos de los artículos 12 de la Ley de Amparo, para recibir notificaciones a la licenciada [REDACTED] Defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán, con sede en Morelia, señalando domicilio para recibir notificaciones las instalaciones de la Defensoría Pública Federal, ubicadas en Avenida Camelinas 3350 tres mil trescientos cincuenta, plana baja, colonia Club Campestre, en esta ciudad de Morelia, Michoacán así como el correo oficial [REDACTED] ante usted con todo respeto comparecemos a exponer:

COMPETENCIA

Previo formulación de agravios, nos permito invocar los ordinales que regulan la competencia del recurso de revisión ante éste Órgano Jurisdiccional Supremo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales

cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

Ley de Amparo.

Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

...

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada.

Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia.

De la reproducción anterior, podemos colegir que el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan en amparo directo los Tribunales Colegiados de Circuito, conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos siguientes:

- a) Cuando el recurso de revisión resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o
- b) Cuando el recurso establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución; o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
- c) Que el Tribunal Colegiado omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas,
- d) Siempre que los anteriores supuestos fijen un criterio de importancia y trascendencia.

De los anteriores presupuestos, podemos delimitar y precisar los casos cuando el máximo Tribunal, puede pronunciarse en materia de amparo directo, vía recurso de revisión; recurso que en el presente asunto se plantea

por estimar que nos encontramos en las hipótesis marcadas con los incisos a) y d), es decir, en la demanda de amparo se planteó la constitucionalidad de normas generales, y que tal determinación fija un criterio de importancia y trascendencia, al tenor de las siguientes tesis de jurisprudencia.

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA IMPUGNAR DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO A TRAVÉS DE ESTE RECURSO.

De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que: a) en la sentencia recurrida se realice un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, un tratado internacional o algún reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o habiéndose planteado, se omita su estudio y b) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el Pleno de ésta, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, el 26 de enero de 2012, estableció que es susceptible de actualizarse la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo cuando se cuestione la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, pues a partir de la reforma al artículo 10. constitucional, se ha desvanecido el obstáculo técnico que impedía conocer sobre su regularidad constitucional. Este planteamiento debe formularse en los recursos previstos en el juicio constitucional, ya que no es dable señalar como acto reclamado destacado en la demanda a la Ley de Amparo, ya que es hasta que se genere un acto de aplicación en perjuicio del particular cuando lo puede combatir. Así, en dichos casos, el órgano revisor no sólo se debe limitar a evaluar la regularidad de la decisión recurrida, sino también puede inaplicar la norma que sirvió de sustento cuando sea violatoria de algún derecho humano. Así, esta Primera Sala concluye, sobre la premisa de que el control constitucional es un elemento transversal a toda función jurisdiccional, que el recurso de revisión procede no sólo cuando exista una cuestión de constitucionalidad vinculada con la litis original, sino también cuando se combata la Ley de Amparo y se satisfagan los tres requisitos siguientes: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) la impugnación de ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada; y, c) la existencia de un recurso contra tal acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada. PRIMERA SALA. Amparo directo en revisión 301/2013. 3 de abril de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebollo, quien reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Tesis de Jurisprudencia cuyos datos de localización son: Época: Décima Época. Registro: 2004320. Instancia: PRIMERA SALA. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 1a. CCXLI/2013 (10a.). Pág. 745. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; Pág. 745.

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SE ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.

El artículo 10. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, dispone en su primer párrafo que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece, mientras que en su segundo acápite prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con la Constitución y

con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En ese contexto es evidente que la mencionada reforma se originó para salvaguardar los derechos humanos de las personas, lo cual se corrobora con el contenido del tercer párrafo del citado precepto que prescribe categóricamente la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los citados derechos. Por tanto, cuando en el amparo se advierta la violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, ya sea en el acto de origen, en el procedimiento administrativo, en uno seguido en forma de juicio o en el juicio propiamente dicho, procede la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, dada la importancia y trascendencia que reviste para el ordenamiento jurídico la tutela de los derechos humanos, pues lo que está de por medio es la restauración o restitución de aquéllos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 362/2011. Beatriz Eugenia Luna Olvera. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. Tesis la transcrita cuyos datos de localización son: Época: Décima Época. Registro: 2001789.

"FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. PRIMERA SALA. FACULTAD DE ATRACCIÓN 43/2004-PL. RELACIONADA CON EL JUICIO DE AMPARO 16/2004. Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del

Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho. Jurisprudencia cuyos datos de localización son: Época: Novena Época. Registro: 169885. Instancia: PRIMERA SALA. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Tomo XXVII, Abril de 2008. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 27/2008. Pág. 150.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

Por su inobservancia los artículos 1º, 14, 16, 20 apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; consecuentemente, los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, violentando con ello derechos fundamentales; por su falta de observancia el contenido de los artículos 68, 130 y 406, párrafo sexto, del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, por su indebida aplicación los artículos 248 bis y 195 bis, del Código Penal Federal; 51, 52 del Código Penal Federal, en relación éstos últimos con el numeral 410, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Fiscal de la Federación nos acusa de haber cometido los siguientes delitos:

- FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA JUDICIAL, previsto y sancionado por el artículo 247 Fracción I, del Código Penal Federal.
- SIMULACIÓN DE PRUEBAS previsto y sancionado por el artículo 248 bis del Código Penal Federal y,
- CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN ATENUADA DE METANFETAMINA previsto y sancionado en el artículo 195 bis del Código Penal Federal.

SEGUNDO.- En ese contexto, resulta oportuno recordar que el sistema de justicia penal adversarial por mandato constitucional se encuentra basado en el principio de presunción de inocencia; luego entonces, es al Ministerio Público a quien compete acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho constitutivo de delito materia de la acusación así como la responsabilidad penal del acusado; luego entonces aquel no está obligado a probar su inocencia; la carga de la prueba por mandato constitucional y así lo establece también el artículo 130, del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde al Ministerio Público.

En ese orden de ideas, en audiencia de debate en sus alegatos de apertura la Fiscalía prometió que probaría, más allá de toda duda razonable que a las tres horas con treinta y dos minutos del primero de julio de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la agencia segunda investigadora de la unidad de litigación de la Fiscalía General de la Republica inicio la carpeta de investigación FED/MICH/MLM/0001574/2017 con motivo de un informe policial homologado, sin número de referencia, firmado por [REDACTED] y [REDACTED] en su calidad de elementos de la policía ministerial del Estado, a través del cual dejaban a disposición, en calidad de detenido, a [REDACTED] y una bolsa de plástico transparente conteniendo una

sustancia que resulto ser metanfetaminas con un peso neto de ochenta y seis gramos ciento diez miligramos, informando que la detención ocurrió el primero de julio del dos mil diecisiete ya que siendo la una hora con diez minutos a bordo de una unidad oficial realizaban recorridos de vigilancia para la prevención del delito circulando sobre la calle [REDACTED] esquina con [REDACTED] cuando se percataron que dos sujetos del sexo [REDACTED] se encontraban sentados sobre la banqueta ingiriendo bebidas alcohólicas quienes al notar la presencia de la policía uno de ellos corre y el otro intenta correr sin lograrlo por lo que le marcaron el alto, acatando la orden, que descendieron de su unidad identificándose como elementos de la policía ministerial siendo el [REDACTED] quien le preguntó su nombre a quien dijo llamarse [REDACTED] por lo que al notar su nerviosismo [REDACTED] le solicita le permita realizarle una inspección a su persona encontrándole en la bolsa delantera de su pantalón una bolsa de plástico transparente conteniendo una sustancia granulosa que resultó ser metanfetamina con un peso neto de ochenta y seis gramos ciento diez miligramos, procediendo a su aseguramiento y llevar a cabo el registro de cadena de custodia; que aproximadamente a la una hora con veinte minutos le informaron que quedaba en calidad de detenido, le dieron lectura de sus derechos indicándole que sería trasladado ante la Procuraduría General de la República, a donde arribaron a las dos horas con treinta y cinco minutos para que se llevara a cabo la certificación médica de [REDACTED] requisitar el informe policial homologado y sus anexos, así como que a las cinco horas de ese mismo día, entregaron los indicios; que se recabaron las entrevistas a los primeros respondientes por parte del suboficial de la policía federal ministerial [REDACTED] en las que los policías ministeriales reiteraron las circunstancias del tiempo, modo, lugar y ocasión de la detención de [REDACTED] versión que es totalmente falsa porque la detención ocurrió entre las diecinueve y las veinte horas del treinta de junio del dos mil diecisiete cuando se encontraba al interior de su domicilio ubicado en la calle [REDACTED] numero [REDACTED] en la [REDACTED] sin que le hayan asegurado ningún narcótico, razón por la cual los ahora acusados en el informe policial homologado que suscribieron plasmaron hechos falsos y faltaron a la verdad, simulando pruebas que se hacen consistir en ochenta y seis gramos ciento diez miligramos de metanfetaminas con la finalidad de inculpar, esto es, de responsabilizar a [REDACTED] de su posesión; así mismo, mantuvieron en posesión desde aproximadamente las dos horas treinta y cinco minutos en que llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República y hasta las cinco horas en que entregaron esa evidencia al responsable de la bodega de evidencias esos ochenta y seis gramos ciento diez miligramos de metanfetamina sin tener autorización o permiso para ello.

Por su parte, la Defensa en sus alegatos de apertura dijo: Cuando hablamos del policía como primer respondiente nos referimos a la primera autoridad con funciones de seguridad pública que arriba al lugar en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan o aportan indicios relacionados con el mismo; en el caso concreto, Señoría, [REDACTED] Y [REDACTED] elementos de la policía ministerial, conmocionados por el atentado que sufrió [REDACTED] alto mando de su institución, acatando las ordenes que le dio su Superior Jerárquico, [REDACTED] firman el informe policial homologado sin haber participado en la detención de [REDACTED]

12

Su Señoría, con el desahogo de los órganos de prueba ofertados por la Fiscalía de la Federación se pondrá de manifiesto, más allá de toda duda razonable, la ausencia de dolo en la conducta desplegada por mis representados, quienes en un afán de contribuir a que se realizara la investigación sobre el atentado que sufrió [REDACTED] en las primeras horas del uno de julio de dos mil diecisiete, en las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, concretamente en la unidad de robos, en esta ciudad, recibieron a una persona de nombre [REDACTED] un informe policial homologado ya elaborado y las evidencias de delito que se imputaba a tal persona, con la orden verbal de su superior jerárquico, [REDACTED] de que lo pudieran a disposición de la ahora Fiscalía General de la República; Que ante la orden recibida, se dirigieron a las instalaciones del Ministerio Público de la Federación, dejando a disposición del Fiscal [REDACTED] al detenido y las evidencias del delito, lo anterior, con total desconocimiento de las circunstancias de esa detención y bajo un estado de conmoción por el atentado que sufrió el [REDACTED] luego entonces, su Señoría la única conducta que se puede reprochar a [REDACTED]

Y [REDACTED] es la de haber acatado las ordenes de su Superior, la que no es constitutiva de delito si tomamos en consideración para ello que la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en su artículo 40 establece las obligaciones y sanciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, estableciendo en su fracción XVII, que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir con diligencia las ordenes que reciban con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; asimismo, el artículo 41, en su fracción VI refiere que deberán obseder las ordenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre ellos funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolos conforme a derecho; y la fracción VII, responder sobre la ejecución de las ordenes dictadas que reciban aun solo superior jerárquico por regla general respetando preponderantemente la línea de mando.

Es por esa razón su Señoría que con el desfile probatorio, lo que se pondrá de manifiesto es que NI [REDACTED] NI [REDACTED] simularon pruebas y tampoco mantuvieron en posesión los ochenta y seis gramos ciento diez miligramos de metanfetamina que originalmente se imputaron a [REDACTED] En ese orden de ideas su Señoría nos encontramos ante una conducta atípica siendo previsible que tanto el policía ministerial que detuvo al entonces investigado [REDACTED] como el que fuera superior jerárquico de mis representados, al rendir su testimonio nieguen su intervención en los hechos que son materia del Juicio que nos ocupa lo que lleva a cuestionar en el caso concreto, si los policías ministeriales [REDACTED] y [REDACTED] fueron víctimas del sistema que decidieron ir a juicio buscando justicia.

**PARTE DE LA SENTENCIA QUE ESTIMAMOS CONTIENE UN
PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS
GENERALES**

Considerando Quinto, de la resolución pronunciada en sesión pública ordinaria virtual número 17 de **veintinueve de octubre de dos mil veinte**, determinaron negarnos el amparo y la protección de la justicia federal; consecuentemente, confirmaron la sentencia de veintiocho de mayo de dos

mil veinte, dictada por la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, al resolver el toca de apelación 3/2020-V así como la sentencia definitiva emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio instituido como Tribunal de Enjuiciamiento dictada dentro de AUDIENCIA DE DEBATE, celebrado en audiencias de fecha dieciocho, diecinueve, veinte y veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve en la causa penal 717/2018.

AGRAVIOS

PRIMERO.- La resolución pronunciada en sesión pública ordinaria virtual número 17 de **veintinueve de octubre de dos mil veinte**, determinaron negarnos el amparo y la protección de la justicia federal; consecuentemente, confirmaron la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veinte, dictada por la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, al resolver el toca de apelación 3/2020-V así como la sentencia definitiva emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio instituido como Tribunal de Enjuiciamiento dictada dentro de AUDIENCIA DE DEBATE, celebrado en audiencias de fecha dieciocho, diecinueve, veinte y veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve en la causa penal 717/2018, nos causa agravios porque conculca las garantías y derechos humanos de los suscritos quejosos previstos en los artículos 1, 14, 16, 20 y demás relativos aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la prevista en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", cuyo texto dispone:

ARTÍCULO 9.- Principio de Legalidad y de Retroactividad.

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable...

Como podemos apreciar de ésta última disposición, dicho instrumento internacional exige que para ser condenado por acciones u omisiones estas deben ser consideradas delictivas conforme el derecho aplicable; luego entonces, para que una conducta en nuestro país sea considerada como delictiva es necesario que así lo establezca la legislación.

SEGUNDO.- Los elementos que constituyen el tipo penal materia de la acusación, son:

Por lo que ve al delito de FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE UNA AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL, previsto y sancionado por el artículo 247, Fracción I, del Código Penal Federal,

- a) Que el sujeto activo del delito sea interrogado por una autoridad distinta de la autoridad judicial que se encuentre en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;
- b) Que el sujeto activo del delito en ese interrogatorio faltare a la verdad.

Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 7º del Código Penal Federal, se obtiene que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

El artículo 8º establece que "las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

En ese orden de ideas, resulta fundamental establecer que el delito que nos ocupa en este apartado, es necesariamente doloso, entendiendo como dolo la voluntad de cometerlo.

El Tribunal de Enjuiciamiento, en su fallo de condena determino no tener por acreditado éste delito, lo anterior, atendiendo a que la palabra falsear es sinónimo de simular; luego entonces, de tener por acreditados ambos delitos, el de **FALSEDAD EN DECLARACIONES ANTE UNA AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL**, previsto y sancionado por el artículo 247, Fracción I, del Código Penal Federal así como el de **SIMULACIÓN DE PRUEBAS**, previsto y sancionado en el artículo 248 bis, del Código Penal Federal, equivaldría a recalificar, esto es, sancionar doblemente una conducta, lo que va en contravención a lo establecido por el artículo 23, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.- Consideramos importante puntualizar que en estos motivos de inconformidad, nos referimos esencialmente a lo determinado por el Juez de Control constituido como Tribunal de Enjuiciamiento en razón de que tanto la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en su resolución de veintiocho de mayo de dos mil veinte, como los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito, en su resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se concretaron efectuar una relación sistemática de los conceptos de violación que planteamos, concretándose a transcribir lo manifestado para nuestra defensa y convalidar la determinación del Tribunal de Enjuiciamiento sin fundar ni motivar su determinación, violentando en nuestro agravio, derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso y evidentemente, el principio de presunción de inocencia que nos asiste lo que se pone de manifiesto a continuación.

Los elementos que conforman la materialidad del delito de **SIMULACIÓN DE PRUEBAS**, previsto y sancionado en el artículo 248 bis, del Código Penal Federal, son:

- a) Que el sujeto activo del delito simule la existencia de una prueba material, en el caso concreto **CIENTO OCHENTA Y SEIS GRAMOS CIENTO DIEZ MILIGRAMOS DE METANFETAMINA**.
- b) Que con esa prueba material simulada se haga presumir la responsabilidad penal de, en el caso concreto, [REDACTED] con el propósito de inculparlo en la comisión de un delito.

El Tribunal de Enjuiciamiento Y ASÍ LO CONVALIDARON, sin razonar ni fundamentar su determinación, la Juzgadora de Segunda Instancia y los Magistrados del Tribunal Colegiado en materia penal, que ese delito debe ser doloso y lo tuvo por acreditado bajo los argumentos de que del desfile probatorio tomo conocimiento de que tanto [REDACTED] como [REDACTED] en su calidad de elementos de la Policía Ministerial del Estado de Michoacán, suscribieron un informe policial homologado, por lo cual Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora de esta ciudad, licenciado [REDACTED] dio inicio a la carpeta de investigación con terminación 1574/2017, en la que ordenó diversos actos de investigación, entre ellos, que se recabaran las entrevistas a los primeros respondientes, las que

recabo el policía federal ministerial [REDACTED] a las cinco horas con cinco minutos a [REDACTED] y a las cinco horas con cincuenta minutos de esa misma fecha, a [REDACTED] en las que los primeros respondientes reiteraron las circunstancias de la detención de [REDACTED] así como el aseguramiento del narcótico cuya posesión le atribuían; que en el plazo de retención, el Fiscal decretó la libertad de [REDACTED] porque consideró que existían indicios razonables de que la detención no había ocurrido como lo manifestaban los aprehensores sino que había ocurrido entre las diecinueve horas y las veinte horas de un día anterior, es decir del treinta de junio de dos mil diecisiete, cuando diversos elementos de la policía ministerial estatal, ajenos a los acusados, ingresaron, ilegalmente al domicilio del detenido ubicado en la calle [REDACTED] número [REDACTED] en [REDACTED]

Refirió también el Juez de Control instituido como Tribunal de Enjuiciamiento que la versión de la detención del día treinta de junio de dos mil diecisiete entre las diecinueve y las veinte horas, encuentra sustento en los testimonios del propio [REDACTED] de [REDACTED] madre del detenido; de [REDACTED] hermana del detenido; de [REDACTED] vecino del detenido; de [REDACTED] telefonista del C5i quien atendió la llamada de emergencia realizada por la hermana del detenido, así como con el dicho de los elementos de la policía Michoacán, [REDACTED] y [REDACTED] quienes fueron los elementos que dieron atención a la llamada de emergencia citada y acudieron a dicho lugar corroborando los hechos narrados e incluso dijo el Tribunal de Enjuiciamiento que para tener por acreditado que la detención fue el treinta de junio de dos mil diecisiete, se debe tomar en cuenta el dicho del licenciado [REDACTED] en ese entonces Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien manifestó que dio trámite al expediente 1763/2017, derivado de la constancia de llamada telefónica de denuncia que formuló [REDACTED] en la que refirió la detención de su hijo e incluso incorporó a juicio los oficios 3472 y 3473, relativa a esa denuncia de violación de derechos fundamentales y que apunta en el mismo sentido, la pericial de [REDACTED] respecto a la descripción de la llamada telefónica del auxilio detallado.

Dijo el Juez que con motivo de la expuesto el licenciado [REDACTED] concluyo que al presentar un informe policial homologado ante el Fiscal de la Federación y porque **reiteraron** las circunstancias de tiempo modo ante el elemento de la policía federal ministerial los acusados plasmaron hechos falsos faltando a la verdad incurriendo en un hecho que la ley señala como delito al simular una prueba material consistente precisamente en ochenta y seis gramos ciento diez miligramos de metanfetamina, con la finalidad de inculpar de un delito a [REDACTED] actualizándose así el hecho que la ley señala como delito de **SIMULACIÓN DE PRUEBAS**, previsto y sancionado en el artículo 248 bis, del Código Penal Federal.

Argumento también el Tribunal de Enjuiciamiento que se acreditó la calidad de elementos de la policía Ministerial del Estado de Michoacán, de [REDACTED] y de [REDACTED] con el testimonio de la licenciada [REDACTED] en su carácter de Directora de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quien hizo referencia a los movimientos de personal de esa institución incorporándose los nombramientos que acreditan que los acusados en la fecha al treinta de junio de dos mil diecisiete se desempeñaban como elementos de la policía

ministerial del Estado de esa Fiscalía General del Estado de Michoacán, sin que ese hecho haya sido cuestionado por los acusados quienes dijeron formaban parte del grupo C5.

Dice el Tribunal de Enjuiciamiento que el verbo simular es presentar algo ficticio como real y esta vertido en su totalidad en la detención de [REDACTED] y que el elemento relativo a que tal simulación se realice con la finalidad de inculpar a alguien se tiene por acreditado por un lado con el dicho de [REDACTED] apovado con la versión de [REDACTED]

testigos que fueron coincidentes en afirmar que la detención del primero de ellos ocurrió entre las siete y las ocho de la noche del treinta de junio del dos mil diecisiete cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la calle [REDACTED]

Que adicionalmente también toma en consideración el testimonio de [REDACTED] y [REDACTED] elementos de la policía Michoacán quienes dieron seguimiento a la llamada de auxilio que realizó al 911 [REDACTED] quienes corroboraron las circunstancias de la detención acaecida el treinta de junio de dos mil diecisiete entre las diecinueve y las veinte horas.

También dijo el Tribunal de Enjuiciamiento se debe tomar en cuenta el dicho del licenciado [REDACTED] en relación a la queja que presentó [REDACTED] y en la entrevista que realizó al propio [REDACTED]

Que se cuenta además con la referencia de [REDACTED] elemento de la Policía Ministerial del Estado, quien relato como el treinta de junio de dos mil diecisiete cuando se encontraba en la unidad de robos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en atención a la petición que le hizo el diverso elemento denominado [REDACTED] se constituyó en [REDACTED] por fuera del inmueble marcado con el número [REDACTED] de la calle [REDACTED] en donde se estaba llevando a cabo la detención de [REDACTED] por diversos elementos de su corporación, sin que entre ellos se encontraran [REDACTED] ni [REDACTED]

Dice también el Tribunal de Enjuiciamiento que se debe tomar en cuenta la circunstancia vertida por el licenciado [REDACTED] quien fue llevando una secuencia lógica y cronológica, haciendo del conocimiento que horas antes de que se presentaran ante él los elementos de la policía ministerial tomó conocimiento del hecho por el dicho de [REDACTED] y [REDACTED] quien además, dijo, previno a los primeros respondientes de que verificaran la autenticidad del contenido del informe policial homologado.

CUARTO.- Para tener por acreditado el delito de **SIMULACIÓN DE PRUEBAS**, el Juez de Control constituido como Tribunal de Enjuiciamiento pasó por alto las inconsistencias de que adolece el testimonio del licenciado [REDACTED] entre las que se encuentran las siguientes.

- Que refirió el licenciado [REDACTED] que el treinta de junio de dos mil diecisiete entre las nueve y nueve y media de la noche cuando se encontraba en el área de recepción atendiendo a unas personas en ese momento le informan la presencia de unas personas que se encontraban buscando a un familiar, identificándose con quien a la postre resultaron ser [REDACTED] y [REDACTED] quienes preguntaban por un

familiar que había sido detenido en [REDACTED] haciéndole saber que ya habían acudido a las instalaciones de la Procuraduría del Estado pero que les dijeron que ahí no se encontraba por lo que acudieron a ese lugar; que les informó que no tenía detenidos, sugiriendo a esas personas acudieran a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que les auxiliaran en la búsqueda de su familiar.

- De la declaración del licenciado [REDACTED] se conoce que inicialmente ni la señora [REDACTED] ni [REDACTED] mamá y hermana de [REDACTED] le hicieron saber el nombre del familiar que buscaban ni el domicilio en el que había sido detenido.
- Al rendir su testimonio tanto [REDACTED] como [REDACTED] mamá y hermana de [REDACTED] contrario a lo declarado por el licenciado [REDACTED] afirmaron que si le hicieron saber al joven que resultó ser el Ministerio Público [REDACTED] tanto el nombre de su familiar, [REDACTED] como que había sido detenido por elementos de la policía ministerial, quienes se lo llevaron de su casa ubicada en la calle [REDACTED] número [REDACTED] de [REDACTED]
- A pregunta concreta que le hizo esta defensa al licenciado [REDACTED] refirió que cuando le informaron vía telefónica que le pondrían a disposición a un detenido por parte de elementos de la policía ministerial, de ninguna manera lo relaciono con la persona por la cual le habían ido a preguntar horas antes dos personas del sexo [REDACTED]
- Al rendir su testimonio el licenciado [REDACTED] también dijo que al llegar a las instalaciones de la Fiscalía le hizo saber a [REDACTED] que no se preocupara que ya lo habían ido a buscar dos señoras una chaparrita peloncita y que inclusive [REDACTED] a quien le estaban dejando a disposición le comentó que seguramente era su mamá y su hermana.
- Al rendir su declaración [REDACTED] manifestó que desde que lo vio el licenciado [REDACTED] al verlo le dice que ya lo había ido a buscar una señora chaparrita peloncita comentándole que no se preocupara que lo que ellos decían refiriéndose a los ministeriales con lo que era nada concordaba.
- También refirió el Fiscal [REDACTED] al rendir su testimonio que les hizo ver a los primeros respondientes, [REDACTED] y [REDACTED] las consecuencias de presentar un informe policial homologado alterado.
- Llama la atención esa afirmación del Fiscal, toda vez que es inusual que el propio Fiscal les haga saber a los primeros respondientes las consecuencias de presentar un informe policial homologado falso, cuando al rendir su testimonio refirió no saber nada en relación con los hechos que se pudieran contener en el mismo.

Del testimonio de [REDACTED] Agente de la Policía Federal Ministerial que participo en la carpeta de investigación número FED/MICH/MLM/0001574/2017, cuya integración inicio el licenciado [REDACTED]

recabo entrevistas a los primeros respondientes, y en las que dijo se reiteraron las circunstancias de la detención plasmadas en el informe policial homologado; sin embargo, a pregunta expresa de la defensa, acepto que en el formato en que se contienen tales entrevistas no se asentó el artículo que sanciona la falsedad en declaraciones.

El Tribunal de enjuiciamiento desestimo el contenido de las declaraciones de

progenitora del inicialmente detenido en el aspecto de que cuando ya se llevaban detenido a su hijo en un carro blanco, las personas que lo detuvieron, de la camioneta gris en la que habían llegado sacaron una bolsa de plástico negra y la subieron al carro en que trasladarían a su hijo, es oportuno tener presente que esta testigo a pregunta directa de la Fiscalía dijo no haber visto ni en su domicilio ni fuera del mismo ni a ni a

refirió haber visto cuando los agentes de la policía ministerial, de la camioneta gris, en la que llegaron sacaron una bolsa de plástico negra, la que subieron a la parte de atrás del vehículo blanco rotulado con emblemas de recuperación de vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, colocándola en la parte de atrás donde ya tenían a refirió también que la persona que conducía un guinda fue quien sacó a del baño lo esposo y se lo llevó asimismo preciso que ninguno de los dos acusados se constituyó en el lugar de la detención.

De ambas declaraciones, la de y la de es válido concluir que quienes simularon una prueba falsa, con la finalidad de inculpar, como responsable de la comisión del delito de CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE METANFETAMINA a la persona de nombre lo fueron los diversos elementos de la policía ministerial, los que arribaron al número de la calle de y detuvieron, sin que estuviera en la flagrante comisión de un delito y sin que mediara orden de aprehensión en su contra a

Y elementos de la policía Michoacán, de ellos escuchamos que efectivamente acudieron a a un llamado que hizo al C5 una persona de nombre pero que al llegar al domicilio que se les indicó por el dicho de quien dijo ser el comandante que las personas que se encontraban en el lugar eran policías ministeriales que daban cumplimiento a una orden de aprehensión.

Adujo también el Juzgador que del testimonio de se advierte que para arribar a su conclusión, consistente en que la detención de no fue realizada entre la una y las tres horas cincuenta minutos del uno de julio de dos mil diecisiete, así como que los elementos de la policía ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no trasladaron inmediatamente y sin escalas a las instalaciones de la Procuraduría General de la República a tomó en cuenta las declaraciones de y , rendidas, por escrito, en sede ministerial, de las que se conocen que manifestaron que les solicitaron fueran a apoyar a unos compañeros en pero que antes de llegar se encontraron a unos compañeros quienes les informaron que ya no era necesario por lo que se

regresan, siendo hasta el día siguiente que les piden firmen el informe policial homologado, y sigue diciendo el Juzgador que esa prueba no fue controvertida y eso es una circunstancia que abona que los acusados si sabían de los hechos, esto es, ya tenían un conocimiento previo de que la detención de [REDACTED] había sido en un momento diferente en cuanto a las circunstancias que plasmaron en el informe policial homologado que suscribieron, de donde se colige que los hechos fueron simulados con la finalidad de imputar una conducta delictiva a [REDACTED] de ahí que sea válido tener por actualizado el dolo.

No obstante lo anterior, el hecho de que les hubieran solicitado el apoyo a los aquí acusados para que acudieran a [REDACTED] en apoyo de diversos compañeros de ellos, de ninguna manera implica que hayan tomado conocimiento en ese momento de las circunstancias de la detención de [REDACTED] como lo afirma el Juzgador, máxime si tomamos en consideración que no se constituyeron en el lugar de la detención.

Paso desapercibido para el Tribunal de Enjuiciamiento el contenido del artículo 358 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que textualmente establece:

"La prueba que hubiere de servir en base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio..."

Asimismo, el artículo 378, del citado ordenamiento legal, establece:

"Si el acusado decide no declarar en juicio, ninguna declaración previa que haya rendido puede ser incorporada a éste como prueba, ni se podrán utilizar en el juicio bajo ningún concepto".

De los aludidos preceptos se obtiene que indebidamente el Juzgador tomo en consideración el contenido de las declaraciones que en su caso pudieron haber rendido los acusados en fase ministerial, lo anterior, es así toda vez que en su caso, debieron ser incorporadas en su totalidad por la Fiscalía de la Federación, lo que de ninguna manera aconteció durante la audiencia de debate.

Mas aún [REDACTED] y [REDACTED] hicieron uso de su derecho a declarar, siendo coincidentes en manifestar, esencialmente, que se desempeñaban como agentes de la policía ministerial del Estado; que se encontraban adscritos al grupo C5, bajo el mando de [REDACTED] que el treinta de junio de dos mil diecisiete, recibieron la indicación de su superior en el sentido de que deberían trasladarse a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado porque se harían cargo de firmar un informe policial homologado; que aproximadamente a las nueve de la noche se constituyeron en la unidad de robos de esa institución, en donde se encontraba su Superior quien les acompañó hasta el otro edificio en donde el personal del área de enlace elaboraría el informe policial homologado que ellos dos firmarían, encontrándose presente en aquella unidad la persona que habrían de poner a disposición del Fiscal de la Federación; que cuando se encontraban en espera de que se hiciera ese informe policial [REDACTED] recibió una llamada telefónica indicándole a [REDACTED] que lo acompañara a [REDACTED] porque habían herido al [REDACTED] dando indicaciones a [REDACTED] que permaneciera en las instalaciones vigilando que se elaborara el informe policial homologado; que pasadas unas dos horas regresaron [REDACTED] y [REDACTED]

136

██████████ a las instalaciones de la Procuraduría del Estado, concretamente al área de robos en donde seguía la persona que pondrían a disposición, ██████████ que después de verificar que ya estaba listo el informe policial homologado, se dirigieron a la Fiscalía Federal; ██████████ la persona detenida y otro elemento a bordo de una unidad; ██████████ en otra unidad y ██████████ y otro ministerial, en un ██████████ guida; que llegando a las Instalaciones de la PGR ██████████ se acercó al carro guinda y ██████████ le hizo entrega de un folder conteniendo el informe policial homologado y de una bolsa de plástico transparente conteniendo una sustancia blanca que resulto ser metanfetamina; que ingresaron a la Fiscalía, esperaron que llegara el Fiscal, le entregaron el informe policial homologado, al detenido y al encargado de evidencias la bolsa plástica conteniendo la metanfetamina; que un elemento de la policía federal ministerial les practico una entrevista a cada uno de ellos, sin que les hiciera del conocimiento las consecuencias de conducirse con falsedad, y que al salir aun los esperaba su superior inmediato, ██████████ a quien le entregaron el informe policial homologado con el sello de recibido; que de ahí se dirigieron a su punto de reunión en donde se les indico que ya podían retirarse a descansar.

El dicho de los acusados encuentra sustento en la propia declaración del licenciado ██████████ quien refirió que al llegar a las instalaciones de la Fiscalía para recibir la puesta a disposición se percató que por fuera de la misma se encontraba al menos un vehículo con ministeriales.

██████████ puntualizo que los aquí acusados, ██████████ y ██████████ no participaron en su detención; que tampoco le pusieron a la vista la droga que se le atribuía en posesión que a ellos los vio hasta que se encontraba en la unidad de robos de la Procuraduría del Estado; que nunca los percibió elaborando el informe policial homologado aunque fueron ellos los que lo pusieron a disposición del Fiscal de la Federación en calidad de detenido; que durante el tiempo que permaneció en la unidad de robos a ese lugar llegaron muchos de los elementos que se constituyeron en su domicilio entre ellos los que lo detuvieron quienes después de un rato regresaron y le dijeron que estaba limpio y que por ello lo pasarían a barandilla y que de allí saldría pero que sin embargo volvieron a regresar y lo subieron a una camioneta junto con el comandante pero que no alcanzaron a salir del edificio de la Procuraduría porque ellos recibieron una llamada y lo regresaron a la unidad de robos diciendo que ya no se podía hacer nada; que fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría del Estado en un vehículo blanco con el emblema de recuperación de vehículos.

Por su parte, ██████████ declaro que en la fecha del evento que nos ocupa se desempeñaba como comisionado encargado del área de robos de la Procuraduría General de Justicia del Estado; que el treinta de junio del dos mil diecisiete el comandante ██████████ aproximadamente a las nueve de la noche fue víctima de un atentado que originó su muerte que por esa razón se convocó a la mayor cantidad de ministeriales para que se constituyeran en ██████████ al fin de realizar investigaciones relacionadas con ese lamentable hecho siendo esa la razón por la cual aproximadamente a esa hora se dirigió con todo su personal a la zona de ██████████ en donde ya se encontraba varios de sus compañeros entre ellos ██████████ que el declarante fue comisionado para poner a salvo al hijo del comandante ██████████ y que no encontró lugar más seguro para ello que las propias instalaciones de la Procuraduría habiendo permanecido en su cubículo, dentro de la unidad de robos, toda la noche.

De [REDACTED] escuchamos que efectivamente al treinta de junio del dos mil diecisiete se desempeñaba como encargado de la unidad C5, que solo tiene funciones de vigilancia y prevención del delito; que esa unidad se encontraba conformada por un grupo de aproximadamente seis elementos de la policía ministerial que se encontraban bajo su mando entre los que se hallaban [REDACTED] y [REDACTED] aquí presentes; que de esa unidad él era el único jefe o encargado por lo tanto quien transmitía las ordenes a sus subalternos que debido al atentado que sufrió el comandante [REDACTED] se trasladó al hospital los Angeles ubicado en [REDACTED] para resguardar el lugar ya que ahí se encontraba recibiendo atención medica el comandante [REDACTED]

Este testigo [REDACTED] preciso en su declaración que como integrantes del C5, los elementos de la policía ministerial bajo su mando, solo tienen funciones de prevención del delito e inclusive que solo realizan sus recorridos en un área que abarca solo dos colonias de esta [REDACTED] concretamente la [REDACTED] y la [REDACTED] así como que no realizan detenciones salvo que se trate de un caso flagrante, grave y urgente, esto es, de manera excepcional.

Como se anticipó en el alegato de apertura por parte de la defensa, [REDACTED] y [REDACTED] evidentemente, negaron su participación en la detención de [REDACTED] no obstante lo anterior, de sus declaraciones se pudo establecer que el primero de ellos, [REDACTED] era el Encargado de la Unidad de Robos, debemos tener presente que en el lugar de la detención de [REDACTED] se logró establecer la presencia de un vehículo blanco rotulado con el logo de recuperación de vehículos; del testimonio de [REDACTED] elemento de la Policía Ministerial del Estado, nos dimos cuenta que estaba adscrito al área de Aprehensiones, aquí es importante puntualizar que los familiares de [REDACTED] y [REDACTED] su vecino, [REDACTED] y de los dos elementos de la policía Michoacán, [REDACTED] y [REDACTED] son coincidentes en referir que los agentes de la policía ministerial que detuvieron materialmente a [REDACTED] argumentaron que estaban dando cumplimiento a una orden de aprehensión.

De lo hasta aquí expuesto deviene concluir que la Fiscalía de ninguna manera logro acreditar, como lo prometió en su alegato de apertura, que [REDACTED] y [REDACTED] hayan simulado la existencia de una prueba material, en el caso concreto CIENTO OCHENTA Y SEIS GRAMOS CIENTO DIEZ MILIGRAMOS DE METANFETAMINA, con el propósito o la intención de inculpar a [REDACTED] en la comisión de un delito.

Lo anterior es así en razón de que en audiencia de debate ningún medio de prueba se desahogó tendiente a probar que [REDACTED] y [REDACTED] hayan tenido la intención (dolo) de responsabilizar a [REDACTED] de un delito que no cometió; tampoco se acredito que tuvieran alguna causa de enemistad, problema o enojo con esa persona como para querer causarle un daño, inculparlo en un delito.

Debemos tener presente que ni [REDACTED] ni [REDACTED] tenían la posibilidad de obtener por si los ochenta y seis gramos ciento diez miligramos de esa sustancia que resulto ser metanfetamina, recordemos que su función era solamente realizar recorridos de prevención y disuasión del delito bajo las ordenes de su Jefe inmediato [REDACTED] en un área muy definida.

En ese orden de ideas, lo procedente es revocar la determinación de condena absolviendo a [REDACTED] y [REDACTED] de la acusación que por la comisión de este delito realizó en su contra la Fiscalía de la Federación, al no encontrarse acreditada la materialidad de tal ilícito; luego entonces, la Fiscalía no logra desvirtuar el principio de presunción de inocencia de que se encuentran revestidos ambos acusados.

QUINTO.- Finalmente, los elementos contenidos en la descripción típica del delito de **CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN ATENUADA DE METANFETAMINA**, que prevé y sanciona el artículo 195 bis, del Código Penal Federal, son:

- a) La existencia física de un narcótico, en el caso concreto metanfetamina;
- b) Que el sujeto activo del delito mantenga dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad un narcótico;
- c) Que esa posesión la ejerza sin contar con autorización o permiso de la autoridad sanitaria correspondiente.

Este delito es necesariamente doloso.

Contrariamente a la respetable apreciación del Tribunal de Enjuiciamiento, Magistrada del Tercer Tribunal Unitario y Magistrados del Tribunal Colegiado en materia penal, ambas autoridades del Décimo Primer Circuito, este delito de ninguna manera se puede tener por acreditado, lo anterior es así partiendo, primero, de que la acusación la hace consistir la Fiscalía en que [REDACTED] y [REDACTED] mantuvieron dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad ochenta y seis gramos ciento diez miligramos de metanfetamina, desde que arribaron a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, esto es, desde las dos horas treinta cinco minutos, hasta las cinco horas del primero de julio de dos mil diecisiete, en que dejaron ese narcótico a disposición del encargado de evidencias de la Fiscalía General de la República, lo que se traduce en que esa "posesión" que les atribuye el Fiscal sobre tal narcótico se materializó encontrándose ya en el interior de las instalaciones de la Fiscalía.

Debemos tener presente que los suscritos, [REDACTED] y [REDACTED] en nuestra calidad de elementos de la policía ministerial, solo nos encontrábamos dando cumplimiento a una orden de quien esa temporalidad era nuestro Jefe Inmediato quien por cierto vigilaba por fuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República que cumpliéramos la orden que nos dio; luego entonces, esa actividad la realizamos como policías es por ello que de ninguna manera se puede traducir como una posesión menos aún si tomamos en consideración que por posesión debemos entender la posibilidad de ejercer actos de dominio sobre una cosa, en el caso concreto, sobre esa metanfetamina; luego entonces, es incorrecto tener por acreditado el elemento típico relativo a que [REDACTED] y [REDACTED] hayamos tenido bajo nuestro radio de acción y ámbito de disponibilidad dicho narcótico máxime que esa posesión derivada de la función encomendada se realizó y así lo refiere también el Órgano Técnico acusador, al interior de las instalaciones del Edificio de la Fiscalía General de la República, Delegación Michoacán.

El Fiscal Tampoco logro acreditar el tercero de los elementos que integran la descripción típica del delito de CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN ATENUADA DE METANFETAMINA, que se hace consistir en que, sin conceder que así haya sido, [REDACTED] y [REDACTED] hayan ejercido posesión consciente y voluntaria sobre esos ochenta y seis gramos ciento diez miligramos de metanfetamina, sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad sanitaria.

Se afirma lo anterior en razón de que del testimonio de [REDACTED] tomamos conocimiento que la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios solo se encuentra facultada para otorgar autorización para el manejo de medicamento controlado porque contenga alguna sustancia psicotrópica; luego entonces, con el dicho de ese testigo, contrario a la apreciación del Juzgador, la Fiscalía nunca acredito que ni [REDACTED] y [REDACTED] hayan carecido de autorización por parte de la autoridad sanitaria para poseer algún tipo de narcótico.

Dijo el Tribunal de Enjuiciamiento que la defensa no probó que los acusados tuvieran permiso para poseer los ochenta y seis gramos ciento diez miligramos de metanfetamina.

Paso desapercibido para el Juez de Control constituido en Tribunal de Enjuiciamiento, que es al Fiscal a quien, en este sistema de justicia penal adversarial, a quien corresponde probar, más allá de toda duda razonable su teoría del caso, luego entonces, que ni [REDACTED] y [REDACTED] contaban con autorización para, en su caso, mantener en posesión tal narcótico, obligación con la que incumplió la fiscalía; pretender lo contrario, se traduce en revertir la carga de la prueba al acusado.

Es por lo hasta aquí expuesto que no pueden tenerse por acreditados el segundo y tercero de los elementos que integran la descripción típica del delito que nos ocupa.

SEXTO.- No obstante lo anterior, el Juez constituido en Tribunal de Enjuiciamiento, tuvo por acreditada la responsabilidad penal de [REDACTED] y [REDACTED] en la comisión del delito de **SIMULACIÓN DE PRUEBAS**, previsto y sancionado en el artículo 248 bis, del Código Penal Federal así como por el de **CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN ATENUADA DE METANFETAMINA** previsto y sancionado en el artículo 195 bis del Código Penal Federal, razón por la cual en **AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES**, desahogada a partir de las quince horas cinco minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, los condeno a cada uno de ellos a sufrir la pena privativa de libertad de **CUATRO AÑOS DE PRISIÓN** y al pago de **CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN**, equivalentes a **TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CINCUENTA CENTAVOS**, y por el de **SIMILACIÓN DE PRUEBAS**, **DOS AÑOS DE PRISIÓN** y **CIEN DÍAS MULTA**, equivalentes a **SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS**, aplicando el concurso real de delitos, el cual por cierto en audiencia de individualización la Fiscalía no solicito, remitiéndose, el Juez de Control instaurado como Tribunal de Enjuiciamiento, indebidamente, al escrito de acusación; sanciones que en su conjunto son **SEIS AÑOS DE PRISIÓN y CIENTO CINCUENTA DÍAS MULTA**.

El artículo 130, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal".

En ese mismo orden de ideas, el artículo 406, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su párrafo sexto, establece:

"El Tribunal de Enjuiciamiento solamente dictara sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio general de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, **conforme lo establezca el tipo penal de que se trate**"

Y al no haberlo apreciado así el Juez de Enjuiciamiento violento en perjuicio del justiciable el contenido del artículo 405, párrafo segundo en relación con la fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que textualmente dice:

Artículo 405, En la sentencia absolutoria el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares, de todo índice o registro público y policial en el que figuren y será ejecutable inmediatamente.

En su sentencia absolutoria el Tribunal de Enjuiciamiento determinara la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia en su caso las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros siguientes:

- I. **Son causas de atipicidad,** la ausencia de voluntad o de conducta, la **falta de alguno de los elementos del tipo penal**, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo vencible.

De lo hasta aquí expuesto deviene concluir que la defensa probó su teoría del caso y al no haberlo apreciado así el Juez de Enjuiciamiento viola en nuestro perjuicio derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, máxime que, se insiste, la carga de la prueba le compete a la Fiscalía y no a los justiciables.

Consideramos resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial número XXXV/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"PRESUNCION DE INOCENCIA, EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCION FEDERAL".- De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculcado se le reconozca el derecho a la libertad, y que el Estado solo lo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra parte, el

principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público", así como el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y a culpabilidad del imputado. Amparo en revisión 1293/2002.- 15 de agosto del 2002.- Unanimidad de once votos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretarios: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores. Tesis la transcrita que el Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto del dos mil dos, aprobó con el número XXXV/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integra tesis jurisprudencial.-

También cobra vigencia la siguiente Tesis de Jurisprudencia:

"PRINCIPIO INDUBIO PRO REO, ESTA PREVISTO IMPLICITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sostenido que de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero y 102, apartado "A", segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva el principio de presunción de inocencia y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo y 23, del citado ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional. En ese tenor, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado. Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, previene que la justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, el referido artículo 23, in fine, proscribela absolución de la instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe ser permanente y no provisoría, además de que el propio artículo 23, previene que no es lícito juzgar dos veces a alguien por el mismo delito, (principio de non bis in idem). En este orden, si en un juicio penal el estado no logra demostrar la responsabilidad criminal, el juzgador está obligado a dictar una sentencia en la que se ocupe de todas las cuestiones planteadas (artículo 17, segundo párrafo), y como ante la insuficiencia probatoria, le está vedado postergar la resolución definitiva absolviendo de la instancia —esto es,



suspendiendo el juicio hasta un mejor momento-, necesariamente tendrá que absolver al procesado, para que una vez precluidos los términos legales de impugnación o agotados los recursos procedentes, la decisión adquiera la calidad de cosa juzgada (artículo 23). T.A. LXXIV/2005. Amparo directo en revisión 1208/2004, 29 de septiembre del 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López.

SÉPTIMO.- La Magistrada del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito, en su resolución de veintiocho de mayo de dos mil veinte y los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito, en su resolución veintinueve de octubre de dos mil veinte, igualmente, se concretaron efectuar una relación sistemática de los conceptos de violación que planteamos, concretándose a transcribir lo manifestado para nuestra defensa y convalidar la determinación del Tribunal de Apelación sin fundar ni motivar su determinación, violentando en nuestro agravio, derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso y evidentemente, el principio de presunción de inocencia que nos asiste.

Consecuentemente con lo anterior y en debida reparación de los agravios que nos causa la resolución pronunciada en sesión pública ordinaria virtual número 17 de **veintinueve de octubre de dos mil veinte**, que dictaron los Magistrados del Tribunal Colegiado en materia penal del Décimo Primer Circuito con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el Amparo Directo 129/2020, solicitamos se **REVOQUE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA** a efecto de que en su lugar se dicte otra en la que se declare que **LA JUSTICIA DE LA UNION NOS AMPARA Y NOS PROTEGE**.

Por lo expuesto y fundado.

A USTED C. MINISTRO PRESIDENTE ATENTAMENTE PEDIMOS:

UNICO.- Admitir el presente RECURSO DE REVISIÓN interpuesto en contra de la Ejecutoria dictada en los autos del Amparo Directo Penal 129/2020, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública ordinaria virtual número 17 de **veintinueve de octubre de dos mil veinte**, en virtud de que lo decidido en la sentencia recurrida pudiera implicar el desconocimiento u omisión de un criterio Sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como indebida interpretación de preceptos constitucionales; dar vista al Agente del Ministerio Público; y en su oportunidad turnar el expediente con los agravios al Ministro Ponente para que el recurso continúe con el curso legal correspondiente.

Morelia, Michoacán,  1 uno de 2020 dos mil veinte.



177d3aff8001241d1964f4f5bbce10805b7fd5a748fe6609f3e0933c154f0dee

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

[illegible]

QUEJOSOS Y RECURRENTES: [REDACTED]
[REDACTED] Y OTRO

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
NÚMERO: 12/2021

SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE AMPAROS,
CONTRADICCIONES DE TESIS Y
DEMÁS ASUNTOS.

En la Ciudad de México, a once de enero de dos mil veintiuno, se da cuenta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo siguiente:

| Contenido: | Presentado en: |
|--|---|
| 1. Documento denominado “ Acuse de envío ”, con folio electrónico 211/2021, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, recibido por conducto del MINTERSCJN, registrado con número 195-MINTER , mediante el cual refiere los días hábiles e inhábiles transcurridos entre el día de la notificación de la resolución impugnada y el día de presentación del escrito de agravios. | Versión impresa fidel de la versión electrónica digital |
| 2. Demanda del juicio de amparo directo 129/2020 promovida por los quejosos al rubro mencionados. | |
| 3. Resolución dictada el veintinueve de octubre de dos mil veinte, por el referido órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo directo 129/2020. | |
| 4. Escritos de presentación y de expresión de agravios signados por los quejosos citados al rubro. | |
| 5. Constancia de notificación de la sentencia impugnada. | |
| Contiene requerimiento a OJPJF. | |
| PENAL – DESECHA POR AUSENCIA DE CPC | |

Las constancias anteriores se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de enero del año en curso, por medio del MINTERSCJN en términos de lo señalado en el Acuerdo General número 12/2014. Conste.

Ciudad de México, a once de enero de dos mil veintiuno.

I. Formación de expediente. Se actúa en términos del punto **octavo** del Acuerdo General del Pleno de este Alto Tribunal número **14/2020¹**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de dos mil veinte, cuya vigencia se prorrogó mediante el punto único del instrumento normativo aprobado por el propio órgano jurisdiccional **el siete de diciembre de dos mil veinte²**.

En términos de la normativa aplicable y en cumplimiento a la Circular número 11/2014-AGP SEPTIES de quince de febrero de **dos mil diecinueve**, con el acuse de remisión de los documentos de cuenta, **fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes** al toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por **los quejosos citados al rubro**, contra actos **del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito y de otra autoridad**.

Acúsesse recibo por conducto del MINTERSCJN, en la inteligencia de que la versión digital impresa de este acuerdo hará las veces de dicho acuse. **Con copia autorizada de este proveído**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo, del **Acuerdo General Plenario 9/2020**, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **fórmese cuaderno auxiliar**, al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables

¹ **OCTAVO.** Para los efectos previstos en la legislación que rige los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinte las notificaciones realizadas por lista o por rotulón electrónicos visibles en el Portal de Internet de este Alto Tribunal, tendrán los mismos efectos que las llevadas a cabo mediante la publicación en los estrados de las listas y de los rotulones impresos.
[...]

² **ÚNICO.** Se prorroga del siete al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, la vigencia de lo establecido en los puntos del Tercero al Noveno del Acuerdo General 14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte.

para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en la inteligencia de que podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable.

II. Improcedencia del recurso. En el caso, los solicitantes de amparo citados al rubro, mediante escrito impreso, hacen valer recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 129/2020, en el que transcribe de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte de la sentencia reclamada que a su parecer contiene el problema de constitucionalidad; sin embargo, del análisis de las constancias de autos se advierte que en la demanda no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad, incluyendo inconventionalidad, de una norma de carácter general o, se planteó uno relacionado con la interpretación de algún precepto constitucional o tratado internacional, ni se realizó una interpretación directa de los antes referidos, por lo que debe concluirse que no se surten los supuestos de procedencia que establecen los artículos 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la cual debe desecharse este recurso.

No pasa inadvertido para esta presidencia, la circunstancia de que la parte recurrente invoque que se violaron los derechos contenidos en los artículos 1º, 14 16 y 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la sola mención de ello no actualiza la existencia de un planteamiento genuino de constitucionalidad que

pudiera dar lugar a la procedencia del recurso, dado que sus argumentos van dirigidos a combatir **cuestiones de legalidad tales como la indebida valoración del material probatorio en el juicio de origen**. Sirve de sustento por las razones de su contenido, en lo conducente, el criterio emitido por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2ª./J. 56/2016, cuyo rubro y datos de localización son: **“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE MERA LEGALIDAD DEBEN DESESTIMARSE POR INEFICACES.”**, Época: Décima. Registro: 2011655. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II. Materia(s): Común. Así como la diversa tesis la. CXI V/2016 sustentada por la Primera Sala de este Alto Tribunal con el rubro y datos de localización: **“AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ENTRE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD QUE LO HACEN IMPROCEDENTE, SE ENCUENTRAN LAS REFERIDAS A LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS, LA ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LO RELATIVO A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA.”** Época: Décima. Registro: 2011475. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: tesis aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II. Materia(s): Común.

Cabe agregar que con las constancias que se tienen a la vista, se advierte que el recurso de revisión de cualquier forma resulta extemporáneo, toda vez que la sentencia impugnada fue notificada por lista a la parte recurrente, el día **once de noviembre de dos mil veinte** y el escrito de expresión de agravios se presentó ante la Oficialía de Partes de Correspondencia Común en Morelia, Michoacán, **el uno de diciembre de dos mil veinte y**

ante la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado del conocimiento el dos siguiente; es de concluirse que cuando esto se hizo, ya había transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues dicho período, por disposición de los artículos 18 y 31, fracción II, de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, transcurrió del **trece al treinta de noviembre de dos mil veinte**, inclusive descontándose desde luego, el **doce de noviembre por ser el en que surtió efectos la notificación**; los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre, por ser sábados y domingos, respectivamente; **y finalmente, los días dieciséis y veinte de noviembre de dos mil veinte, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo; y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.**

Finalmente, en términos de lo previsto en el punto tercero del **Acuerdo General Plenario 14/2020**, se hace del conocimiento de las partes que en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán promover por vía electrónica mediante el uso de la FIREL o de la e.firma en términos de lo previsto en el Acuerdo General Plenario 9/2020.

Consecuentemente, tomando en consideración que el presente recurso de revisión es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la fracción IX del artículo 107 Constitucional, con fundamento además en los preceptos 14, fracción II, párrafo primero, de la **invocada** Ley Orgánica y **91 de la Ley de Amparo**, así como en los puntos Cuarto y Segundo Transitorio del Acuerdo General Plenario 9/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil quince, se acuerda:

I. Se actúa en términos del punto octavo, del Acuerdo General del Pleno de este Alto Tribunal número 14/2020, cuya vigencia se prorrogó mediante el punto único del instrumento normativo aprobado por el propio órgano jurisdiccional el siete de diciembre de dos mil veinte.

II. Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

III. Con fundamento en la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la profesionista que menciona en el pliego de agravios; en la inteligencia de que si acredita encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, se le tendrá como autorizada con todas las atribuciones que señala el precepto legal invocado; sin embargo, si tal persona ya tiene reconocido expresa o implícitamente dentro del juicio de amparo, el carácter de autorizada en los términos amplios antes descritos, dicha autorización continuará surtiendo todos los efectos legales en esta instancia.

IV. Las personas que tengan reconocido el carácter de partes en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, por sí o por conducto de sus representantes– no los autorizados de éstas– podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de la o de las personas respecto de las cuales se solicita la autorización correspondiente, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable.

V. Asimismo, las personas que tengan reconocido el carácter de partes en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, por sí o por conducto de sus representantes –no los autorizados de éstas,- **podrán solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas** proporcionando **la CURP de la o de las personas respecto de las cuales se solicita la autorización correspondiente a su FIREL vigente** y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que de éste deriven, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos.

VI. **Notifíquese por lista electrónica** y haciéndolo en forma personal a la parte recurrente, **en el domicilio señalado en su pliego de expresión de agravios**, ubicado en las **instalaciones de la Defensoría Pública Federal**, con domicilio en **“...Avenida Camelinas 3350 tres mil trescientos cincuenta, planta baja, Colonia Club Campestre...”**, en Morelia, Michoacán, por conducto del Tribunal Colegiado del conocimiento, debiéndosele entregar copia autorizada del presente proveído en la inteligencia que de existir impedimento legal para llevar a cabo la diligencia encomendada, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el **artículo 27 de la Ley de Amparo, es decir, se notificará por lista en la que se indique el nombre de la parte a notificar, salvo que se trate de un dato sensible, atendiendo a lo previsto en el diverso 29 de dicho ordenamiento; así como a lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º y 8º, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que**

para los efectos de lo previsto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el MINTERSCJN, en términos del artículo 14, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 12/2014, de diecinueve de mayo de dos mil catorce, hace las veces del despacho número **SSGA_DPO-XVI-195/2021**, por lo que se requiere al referido órgano jurisdiccional a fin de que en auxilio de las labores de esta Presidencia, con la brevedad posible lo devuelva debidamente diligenciado. Asimismo, al Tribunal Colegiado del conocimiento, por medio del referido MINTERSCJN, en la inteligencia de que en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, del Acuerdo General Plenario 12/2014, el acuse de envío que se genere por el citado módulo de intercomunicación con motivo de la remisión de la versión digital de este acuerdo, hace las veces del respectivo oficio de notificación.

En su oportunidad, previa certificación que se elabore en la que se haga constar que este acuerdo causó estado, archívese el toca como asunto concluido.

Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado **Rafael Coello Cetina**.

Identificador de proceso de firma: 42958

| | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------------|----|-------------|
| Firmante | Nombre | ARTURO FERNANDO ZALDIVAR LELO DE LARREA | Estado del certificado | OK | Vigente |
| | CURP | ZALA590809HQTLR02 | | | |
| | Serie del certificado del firmante | 706a6673636a6e000000000000000000000019ce | Revocación | OK | No revocado |
| | Fecha (UTC / Ciudad de México) | 03/03/2021T17:17:26Z / 03/03/2021T11:17:26-06:00 | Estatus firma | OK | Valida |
| | Algoritmo | SHA256/RSA_ENCRYPTION | | | |
| Firma | Cadena de firma | | | | |
| | 21 0b e8 a3 31 07 55 14 17 02 5d 28 81 f3 15 8f b2 9e 5f eb 15 86 c7 8d 70 07 69 92 ca 92 61 a4 1f dc 4e 27 74 be e2 17 68 67 f5 c9 e2 eb 45 ed 27 3f f3 ad 23 ae 81 5a cc e8 0b c2 ff 66 92 80 ed b7 be 71 11 d8 4c 13 bf be ff 90 cb 3a 3e 41 7b 5e f2 8a c7 4f 52 60 d0 91 93 6a 3f 86 a7 7b 5e 59 5c 99 4b 68 cf eb 0c 4e ab bc d9 09 d1 4f d4 ee 1b 9c 53 2b 5c c3 03 60 79 db 8d c8 2a 47 fb e2 0c 80 5e d9 fd fc 27 0c 99 7f ce 5c 8c b2 cf 64 c1 20 d5 e6 16 36 10 de 2a 67 c2 1a 18 a4 6a 01 29 2d cd 28 ef 49 14 54 9b 77 44 00 22 cd 53 bb bc 84 bf 6d 54 2c 7d 06 a9 7a 97 ea 46 28 fe 9c 15 f7 df 8a 37 26 ff 64 c7 84 0a 70 db 8c 50 23 c6 8b 28 21 57 27 ae 9f 09 a7 6d c2 b8 c7 32 11 c8 52 8f 01 cf 9d 4c 78 73 33 0a 6c 9e 1e 93 94 04 f2 df 5f c6 be 13 f3 a9 9d 53 d4 ae 44 | | | | |
| Validación OSCP | Fecha (UTC / Ciudad de México) | 03/03/2021T17:17:26Z / 03/03/2021T11:17:26-06:00 | | | |
| | Nombre del emisor de la respuesta OSCP | OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Emisor del certificado de OSCP | AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Número de serie del certificado OSCP | 706a6673636a6e000000000000000000000019ce | | | |
| Estampa TSP | Fecha (UTC / Ciudad de México) | 03/03/2021T17:17:26Z / 03/03/2021T11:17:26-06:00 | | | |
| | Nombre del emisor de la respuesta TSP | TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Emisor del certificado TSP | AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Identificador de la secuencia | 3654656 | | | |
| | Datos estampillados | 10F5D19C0975FD2FE1E827F996B43CDF2954C11097076DDDB3F29D85C7A458237 | | | |

[illegible]